

CONDICIÓN VEINTIDOS DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



SE PUBLICA TODOS LOS DIAS
EXCEPTO LOS DOMINGOS

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN

Un trimestre dentro y
fuera de la capital. . . 5 ptas
Números sueltos. 0'25
Se admiten suscripciones en la
Imprenta LA POPULAR, Orense.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte dias de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el dia en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*.
—(Artículo 1.º del Código civil).

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
del
CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (que Dios guarde) y Augusta Real Familia continúan en San Sebastián sin novedad en su importante salud.

Gaceta núm. 271

(Gaceta núm. 268.)

REAL DECRETO

En el expediente y actos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Avila y el Juez de primera instancia de Cebreros, con motivo del interdicto de recobrar propuesto por D. Luis Navas Gil contra Valentin Juste Hernandez, de los cuales resulta: Que, con fecha 22 de Octubre de 1888 el Procurador D. Baldomero Mateos, en nombre de D. Luis Navas Gil dedujo ante el Juzgado de Cebreros demanda de interdicto de recobrar la pensión de cierta servidumbre contra Valentin Juste Hernandez, alegando: que su representado es dueño, y como tal, le pertenece en propiedad y posesión un terreno cercado de piedra, al sitio de Chorro Morueco, termino municipal de San Juan de la Nava, que linda: por el Este, con cercado del Gerónimo Varas; Norte, con tierra de Pedro y Antonio Hernandez; Oeste, con otros de Valentin Juste y Antonio Hernandez; y Mediodia, con tierra de Propios; que para el laboreo y demas operaciones ó usos que haya necesitado practicar en la finca descrita, ha penetrado siempre por un terreno contiguo a ella, que en la actualidad posee en el mismo sitio su convecino Valentin Juste Hernandez; y que linda: por el Este, con tierra perteneciente a dicho su representado; Norte, con otra de Antonio Her-

nandez; Oeste, camino público, y Mediodia, con tierra de Propios; que en el mes de Noviembre de 1887 el Valentin Juste Hernandez cercó por completo y sin dejar paso alguno para ir a la finca de Luis Navas Gil, el terreno que queda descrito, como de la pertenencia de aquel, privando con ello a su poderdante de la servidumbre el paso que de siempre venia ejercitando por ese terreno, por penetrar en su finca; que así habian permanecido las cosas, hasta que en el mes de Julio de aquel año, en que su mandante tuvo necesidad de penetrar en su cercado para hacer la recolección de frutos, utilizando el paso de la finca de Valentin Juste, por donde siempre habia ejercitado la servidumbre, fué a virtud de este hecho denunciado en el Juzgado municipal del expresado San Juan por el mencionado Juste, recayendo, despues de celebrado el oportuno juicio de faltas, sentencia condenatoria para su principal, con cuyos hechos se le privaba de la posesión de la servidumbre de paso susodicho, privación que de continuar, no pudiendo de otra suerte penetrar aquel en su finca, le causaba perjuicios irreparables; en meritos de lo cual, terminaba suplicando al Juzgado declarase haber lugar a la admisión del interdicto, y ordenase en su día se repusiese al despojado en la posesión de la referida servidumbre, condenando al despojante en las costas y abonos de los daños y perjuicios ocasionados:

Que admitido el interdicto, y unida a los actos una certificación del acuerdo del Ayuntamiento mayores contribuyentes de San Juan de la Nava, por el que se autorizó la ocupación del terreno necesario de la propiedad de Valentin Juste, para la construcción del camino vecinal que conduce desde dicha villa al Monte Castrejon ó Molinos del rio Alberche, permutandose por cierta parte del terreno que procedente de pasos y coladas en el sitio de Chorro Morueco, correspondia al pueblo, garantizando así al propietario Juste del perjuicio que con la construcción del camino se le irrogaba; sustanciado el interdicto por todos sus trámites, el Juez dictó sentencia restitutoria en 21 de Diciembre de 1888, declarando haber lugar al interdicto propuesto, mandando se mantuviera el despojado en la posesión de la indicada servidumbre, y se requiriese al perturbador para que en lo sucesivo se abstuviera de cometer actos

como los denunciados en la demanda, todo sin perjuicio de tercero, y con las reservas de la ley:

Que apelada esta sentencia y desistido del recurso el apelante antes de ser remitidos los autos a la Superioridad, en tal sentido el Gobernador de Avila, a quien el Ayuntamiento de San Juan de la Nava habia acudido primero para que aprobase ó revocase, conforme a la ley, si a ello hubiera lugar, la permuta de que se ha hecho merito, accediendo luego a lo instancia que así mismo le dirigió la Corporación rezerida, en suplica de que requiriese de inhibición al Juzgado de Cebreros, de acuerdo con lo informado por la Comisión provincial, remitió el oportuno oficio de inhibición a la Autoridad judicial, fundándose en que la demanda de interdicto contrariaba una providencia administrativa firme pues acordada la permuta por el Municipio, sin que se interpusiera recurso alguno contra ella, de existir tal servidumbre no podria el hoy propietario disponer de ella en concepto de libre como fué concedida; pues, si, por ejemplo, tratara de edificar, siendo la servidumbre de paso el objeto del interdicto, quedaria nula tal concesión, por constar ser incompatible con los terminos en que se hizo; en que dado caso que la permuta estuviera mal hecha, por no haberse cumplido en tiempo lo prescrito en el art. 85 de la ley Municipal, nunca seria de competencia de la Autoridad judicial el conocimiento de tal interdicto, porque entonces continuaria el propietario de la parcela en cuestión el Municipio de San Juan de la Nava, y contra éste, y no contra otro particular, se debía dirigir el interdicto; en que contra las providencias gubernativas, cuando están tomadas dentro del círculo de las atribuciones del Ayuntamiento, los Juzgados y Tribunales no pueden admitir interdictos, porque los interesados en tales providencias pueden utilizar los recursos que establece la ley Municipal, y en que existe por último, una cuestión previa por resolver la Administración, es a saber: si la permuta está hecha ó no en forma legal, determinante, como es consiguiente, de la competencia de una ú otra Autoridad se citaban por el Gobernador los artículos 72, 73, 85, 89 y 172 de la ley Municipal, y el 2 y 4 del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente, el Juez sostuvo su jurisdicción, fundándose en

que siendo dueño el Ayuntamiento de San Juan de la Nava del terreno que en virtud de permuta pertenece hoy a Valentin Juste, y siendo asimismo aquella finca como en el oficio de inhibición se afirma, sobrante de la vía pública, obró aquél dentro del círculo de sus atribuciones al enajenarla, otorgando el contrato de permuta, según textualmente dispone el art. 85 de la ley Municipal, habiendo sido otorgado el contrato de permuta con capacidad legal necesaria para que surta sus naturales efectos; y desde que la permuta se perfeccionó con el consentimiento de las partes contratantes, entró de lleno la finca a ser del dominio del derecho civil y privado, y por lo tanto, solo a los Tribunales ordinarios compete el conocimiento de las cuestiones de posesión y dominio que nazcan de las relaciones de derechos, según dispone el artículo 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, y tratándose en el interdicto de recobrar, origen del presente conflicto, de la posesión de una servidumbre de paso que el demandante ha demostrado poseer, y de la cual le ha despojado el demandado, el Juzgado es el único competente para decidir sobre este punto de carácter esencialmente privado; en que la cuestión, objeto del interdicto, no tiene su origen en una providencia administrativa, sino en actos ejecutados por el demandado como dueño de una finca adquirida por permuta con el Municipio de San Juan de la Nava; y por consiguiente, no se ha admitido ni sustanciado el interdicto contra providencia gubernativa, sino que aquél ha versado sobre actos de posesión de una servidumbre de paso, que ni remotamente tiene relación con acuerdos administrativos, no teniendo, por consiguiente, la Administración derecho alguno a intervenir en un asunto que cae de lleno en la esfera del derecho común; y finalmente, en que ni el asunto, objeto del interdicto, ni los actos que le han dado origen, encierran, ni remotamente, carácter administrativo, ni en el presente conflicto hay materia que pueda definir la Administración activa, cayendo en un rollo bajo la esfera de acción de los Tribunales ordinarios; citaba el Juzgado el art. 267 de la ley adicional a la orgánica del Poder judicial, el 51 de la ley de Enjuiciamiento civil y varios decretos sentencia:

Que comunicado testimonio del auto anterior a la Autoridad gubernativa, es-

ta, de conformidad con el informe de la Comisión provincial, insistió en su requerimiento en el sentido de que existiera una cuestión previa que resolver por la Administración, surgiendo de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido su trámite:

Visto el art. 83 de la ley Municipal vigente, según el cual, «las enajenaciones y permutas de los bienes municipales se acomodarán á las reglas siguientes: primera, los terrenos sobrantes de la vía pública y concedidos al dominio particular y los efectos inútiles pueden ser vendidos exclusivamente por los Ayuntamientos; segunda, es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe del Gobernador, oyendo á la Comisión provincial, para todos los contratos relativos á los demás bienes inmuebles del Municipio, derechos reales y títulos de la Deuda pública»:

Visto el art. 89 de dicha ley, que dice: «Los Juzgados y Tribunales no admitirán interdictos contra las providencias administrativas de los Ayuntamientos y Alcaldes en los asuntos de su competencia»:

Visto el art. 172 de la ley que viene citándose, según el cual, «los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por los acuerdos de los Ayuntamientos, haya sido ó no suspendida su ejecución en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el Juez ó Tribunal competente, según lo que atienda la naturaleza del asunto dispongan las leyes»:

Considerando:

1.º Que la presente contienda jurisdiccional ha surgido á causa del interdicto de recobrar la posesión de cierta servidumbre de paso, propuesto ante el Juzgado de primera instancia de Cebreiros por D. Luis Navas Gil contra Valentin Juste Hernández.

2.º Que dicho interdicto tiende en cierto modo á contrariar el acuerdo de permuta del terreno de que se ha hecho mérito, tomado por el Ayuntamiento de San Juan de la Nava, en uso de sus atribuciones, con motivo de la construcción del camino vecinal de la citada villa á Monte Castrejón, á cuyo efecto se inició por la referida Corporación el oportuno expediente, en el cual no ha recaído aun resolución definitiva.

3.º Que con arreglo á lo preceptuado en el art. 89 de la ley Municipal, no es la vía del interdicto la que ha podido y debido utilizarse en el caso de que se trata.

4.º Que esto no obsta para que los interesados que se crean perjudicados puedan hacer valer sus derechos, con sujeción á lo dispuesto en el art. 172 de la ley mencionada, si hubiere lugar á ello, en el modo y forma que las leyes establezcan.

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno:

En nombre de mi Augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en San Sebastián á 17 de Septiembre de mil ochocientos noventa.—
María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(Gaceta núm. 225)

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REAL ORDEN

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á la instancia elevada á este Ministerio por don José Fernández Trío pidiendo se restablezca la legalidad en el Ayunta-

miento de Valdés (Luarca), y que se mande reponer las cosas al estado que tenían en Enero de 1888; dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 3 del actual, el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente promovido por don José Fernández Trío, vecino de Valdés (Luarca) solicitando se restablezca la legalidad del Ayuntamiento de dicho pueblo, mandando reponer las cosas al ser y estado que tenían en Enero de 1888, antes de renunciar sus cargos 14 Concejales.

Resulta de antecedentes que en Enero de dicho año, 14 individuos de dicho Ayuntamiento presentaron la renuncia de sus cargos de Concejales, y que el Gobernador á quien se hizo entrega de aquellas dimisiones, teniendo en cuenta que el número de renunciantes afectaba á la mayoría de la Corporación, nombró en 4 de Febrero para reemplazarlos y cubrir la vacante de Alcalde que por renuncia de D. Estanislao Reguera existía por haber sido previamente admitida, 15 Concejales con el carácter de interinos á fin de que en unión de los propietarios resolvieran acerca de las renunciaciones, y de que en caso de que fuesen admitidas procedieran acto seguido á constituir el Ayuntamiento; que poseídos los interinos en 3 de Marzo siguiente, acordaron admitir las dimisiones, procediendo á constituir la Corporación municipal y á la elección de cargos; que en 30 de Junio del citado año tres Concejales propietarios se dirigieron al Gobernador de la provincia denunciando varios abusos que decían cometidos por el Ayuntamiento y protestando de la irregularidad con que se encontraba constituido sin que apareciera que dicha autoridad resolviese definitivamente sobre el particular.

Así continuaron las cosas hasta que se acordó tuviese lugar una elección parcial que se verificó del 21 al 24 de Noviembre produciéndose una reclamación contra su validez, que según manifiesta el Gobernador en su informe, se encuentra sin resolver, porque habiendo acordado la Comisión provincial reclamar del Ayuntamiento datos y antecedentes, la Corporación municipal interpuso contra aquel acuerdo recurso de alzada ante V. E.

El Gobernador informado sobre este asunto, opina que procede declarar nulo y sin valor ni efecto el nombramiento de Concejales interinos hecho en 4 de Febrero de 1888 y como consecuencia la nulidad del acuerdo adoptado por los mismos en 3 de Marzo siguiente, admitiendo la renuncia de los propietarios y la de las elecciones verificadas en Noviembre del mismo año y Diciembre de 1889, ordenando á la vez que los 14 Concejales dimitentes vuelvan al ejercicio de sus cargos, al menos que interin, de moda legal y fundadas en justa causa no les sean admitidas las renunciaciones; y que constituida así aquella Corporación municipal, proceda á su renovación en el plazo y forma que la ley preceptúa.

La Subsecretaría del Ministerio del digno cargo de V. E., aceptando los fundamentos del informe del Gobernador y estimando evidentemente demostradas la constitución ilegal en que se encuentra el Ayuntamiento de Valdés (Luarca), y la nulidad de todos los actos posteriores á la admisión de las renunciaciones de los Concejales procedentes de la elección de 1887, emite su parecer en el sentido de que los que renunciaron sus cargos vuelvan á ocuparlos previa declaración de nulidad del acuerdo en que se les admitió la renuncia y de todo lo hecho con posterioridad á ella, procediendo

el Gobernador á nombrar Regidores interinos para cubrir las vacantes de los que debieron cesar en 1889.

Vistos los artículos 43 y 63 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.

Considerando que el cargo de Concejales es obligatorio y no puede renunciarse sino por alguna de las causas taxativamente determinadas en la misma, y en cuyo concepto el Gobernador obró incorrectamente al designar Concejales interinos para el solo objeto de admitir á 14 Concejales renunciaciones que no aparece del expediente fuesen fundadas en legítimas causas, puesto que en el acta de la sesión en que se admitieron solo consta que fueron debidamente justificadas, sin determinar la condición de aquéllas:

Considerando que la circunstancia de ser 14 de los 23 que componen la Corporación municipal los renunciantes, demuestra que las excusas debieron obedecer á causas distintas de las taxativamente señaladas por la ley, y que por tanto su admisión fué improcedente:

Considerando que las elecciones verificadas bajo la presidencia de una Corporación interina que indebidamente funcionaba, adolecen de vicios de origen que las invalida.

Considerando que para restablecer la legalidad se hace preciso retrotraer las cosas al estado que tenían en 1888;

La Sección opina que procede reintegrar á los Concejales que formaban la Corporación en Valdés (Luarca) en Enero del expresado año, siempre que no hubiese espirado ya el término de cuatro años que la ley fija para la duración de aquellos cargos, y que constituida legalmente así la Corporación, proceder á nuevas elecciones.

Y conformándose S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone,

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1890.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Oviedo.

Gaceta núm. 224.

CONSEJO DE ESTADO

REALES DECRETOS

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed, que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito contencioso administrativo que, en única instancia, pende ante el Consejo de Estado, entre partes, de una, como recurrente, Aniceto Fernandez Cereceda, representado por don Francisco Delgado, y de la otra la Administración general del Estado, representada por mi Fiscal, sobre abono de atrasos de la pensión que le fué concedida por Real orden de 11 de Febrero de 1887:

Visto:

Visto el expediente gubernativo del que resulta:

Que Aniceto Fernandez Cereceda, en instancia presentada en 11 de Febrero de 1884 en el Gobierno militar de Vizcaya solicitó se instruyera la información prevenida en la Real orden de 27 de Diciembre 1881; y, debidamente tramitada, justificó en ella que no percibía pensión alguna, que tampoco satisfacía contribución de ninguna clase, y que era considerado pobre:

Que remitida la información al Mi-

nisterio de la Guerra con otra instancia del interesado, en que solicitaba se le concediese la pensión correspondiente como padre del soldado Pedro Fernandez Escudero, que falleció en 27 de Octubre de 1875 á consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra, se expidió la Real orden de 11 de Febrero de 1887, por la que se le concedió la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos desde el día 5 de Abril de 1886, en que había justificado su pobreza, con sujeción á lo resuelto en la Real orden de 28 de Febrero de 1884:

Vistas las actuaciones contenciosas administrativas, de las que aparece: Que contra esta Real orden dedujo recurso contencioso á nombre de dicho interesado don Francisco Delgado, con la suplica de que le fueran abonados los atrasos correspondientes á los cinco años anteriores, conforme á la interpretación dada á la ley de Contabilidad, y emplazado mi Fiscal para contestarle, lo hizo con la pretensión de que absolviéndose á la Administración general del Estado, se confirmase la Real orden reclamada:

Visto el art. 5.º de la Ley de 8 de Julio de 1860, que prescribe que las madres viudas y padres pobres de los militares de todas clases muertos en acción de guerra ó en el término de los años á consecuencia de heridas recibidas en ella, ó del cólera, disfrutarán las pensiones señaladas en la tarifa segunda de la misma ley:

Vista la Real orden de 27 de Diciembre de 1881, en que se dispone la forma en que se han de practicar las informaciones de pobreza ante las Autoridades militares:

Considerando que el derecho á pensión concedido por la Ley antes citada á los padres de los militares, si bien arranca de la fecha del fallecimiento de los hijos, es á condición de que aquellos sean pobres y aquellos sean pobres y acrediten esta cualidad en la forma y por los trámites establecidos en la Real orden de 27 de Diciembre de 1881.

Considerando que esta aclaración es acertada, porque la pobreza es una circunstancia accidental de la vida que cambia con frecuencia, por lo que puede sostenerse racionalmente que el interesado que tiene derecho á una pensión mediante la justificación de su pobreza, y deja transcurrir los años sin practicar la prueba indispensable, da á entender que su carencia de recursos ha comenzado en la época en que solicita justificarla, y no antes:

Considerando que en el caso de este pleito el actor alegó su pobreza y pidió se le admitiera la justificación en instancia presentada en 11 de Febrero de 1884, y no habiendo terminado la información hasta 5 de Abril de 1886, no sería justo que se le privase del importe de la pensión en ese período estando justificado que era pobre en la época en que pretendió hacer valer este requisito:

Considerando que, por lo demás, la Real orden reclamada se ajusta al espíritu y letra de la Ley antes citada y de las disposiciones citadas para su ejecución.

Conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesión á que asistieron don Félix García Gomez, Presidente accidental; don Esteban Martínez, don Miguel de los Santos Alvarez, don Juan de Cárdenas, don Angel María Dacarrate, don Enrique de Cisneros, don Fernando Guerra, don José María Valverde, don Julián García San Miguel, don Julian Zugasti y don Eduardo Butler;

Vengo en declarar que Aniceto Fernandez Cereceda no tiene derecho á los atrasos de cinco años que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle abonada la pensión desde 11 de

Febrero de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y con mandose la Real orden reclamada de 11 de Febrero de 1887 en cuanto no se oponga á esta declaración.

Dado en San Sebastián á 24 de Agosto de 1888.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

Publicacion.—Leído y publicado fué el anterior Real Decreto Sentencia por el Excmo. señor don Juan de Cárdenas, Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Audiencia pública celebrada por dicho Tribunal hoy 8 de Octubre de 1888.—Licenciado J. Gonzalez Tamayo.

(Gaceta núm. 227)

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino.

A todos los que las presentes vieren y entendieren y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que, ante el Consejo de Estado pende, en primera y única instancia, entre partes, de la una, el Licenciado D. Carlos Massa Sanguinetti, sustituido posteriormente por el de igual grado D. Eduardo Santana y Lopez, en nombre de D. Fray Manuel Cortés Gonzalez, demandante, y de la otra la Administración general del Estado, demandada y representada por mi Fiscal, sobre revocación de la orden de 15 de Abril de 1873 y compatibilidad de haber ó gratificación de Profesor de Religión y Moral de la Escuela Normal de Orense con la pensión que disfrutaba como religioso exclaustrado:

Visto:

Vistos los antecedentes, de los que resulta:

Que D. Manuel Cortés, que venia percibiendo como religioso exclaustrado la pensión anual correspondiente con arreglo á las leyes y disposiciones vigentes, fué nombrado en 16 de Enero de 1858 Profesor de Religión y Moral de la Escuela Normal de Orense, con la gratificación de 1.500 reales anuales, á la vez que la pensión que disfrutaba:

Que en 4 de Noviembre de 1872 acudió el interesado á la Dirección del Tesoro público con la súplica de que, habiendo prestado juramento á la Constitución, se le rehabilitara en el goce de la pensión como exclaustrado, y que se consignara el pago en la Administración económica de Orense, punto de su residencia en aquella fecha:

Que la Dirección, en 10 de Diciembre de igual año, accedió á lo solicitado, pero expresando que la rehabilitación se entendiera tan solo por la diferencia que resultare entre el haber de exclaustrado y el sueldo de Catedrático que percibía el interesado:

Que contra el anterior acuerdo presentó D. Fray Manuel Cortés recurso de alzada al Ministerio, y fué confirmado lo resuelto por la Dirección por la orden del Poder ejecutivo de 15 de Abril de 1873, que se funda en que la Real orden de 12 de Junio de 1856 se dictó para favorecer el ministerio de la enseñanza, sin quebrantar las obligaciones eclesiásticas que los sacerdotes tienen por razón de sus cargos, como sucede á los Canónigos, dignidades beneficiadas á Párrocos, y con el objeto de que llevasen á las aulas, previo certamen público, el producto de su saber ó de su ingenio; en que Don Manuel Cortés, si bien enseña á los niños y á los adultos en un establecimiento público, no desempeña ningún cargo eclesiástico, ni ejerce funciones parroquiales, pues solo disfruta de una pensión como exclaustrado, que,

con arreglo á la ley de 29 de Julio de 1837, había de cesar cuando los interesados obtuvieran renta eclesiástica ó asignación del Estado, igual ó mayor que dicha pensión:

Que en 6 de Noviembre de 1876, á nombre del interesado, se elevó á la Dirección del Tesoro una instancia con la súplica de que se ordenara á la Administración económica de la provincia que acreditara el todo de la pensión, y que expidiera el cese en Oviedo, para efectuar su abono en Orense, y por acuerdo de 18 de Noviembre del mismo año de 1876, se manifestó al recurrente que necesitaba solicitar y obtener la revisión de su clasificación, pero que en manera alguna tenía derecho á la totalidad de la pensión:

Que en 24 de Enero de 1877 reprodujo el interesado la anterior solicitud, y la Dirección, en 16 de Febrero siguiente, insistió en lo resuelto el 18 de Noviembre de 1876, mandando que se pusiera en conocimiento de Cortés, lo cual manifestó el Jefe económico de la Coruña haberlo efectuado en 1.º de Marzo de 1877:

Que el 16 de Julio de 1879 acudió Don Fray Manuel Cortés al Ministerio de Hacienda pidiendo que le comunicara lo resuelto sobre la alzada presentada en 23 de Enero de 1873, respecto á la incompatibilidad de haberes; y en vista de lo informado por la Administración económica de Orense, de que había sufrido extravío la orden de 15 de Abril de 1873, razón por la cual no la había notificado, la Dirección del Tesoro mandó en 6 de Octubre de 1879 que se diera traslado al recurrente de la ya citada orden de 1873, lo que se cumplió en 22 del mismo por el Jefe económico de la provincia de Orense.

Vistas las actuaciones contenciosas, de las que aparece:

Que el Licenciado D. Carlos Massa Sanguinetti, á quien después sustituyó el de la misma clase D. Eduardo Santana y Lopez, presentó demanda ante el Consejo de Estado, en representación de Fray Manuel Cortés Gonzalez, con la pretension de que se consulte la revocación de la orden anterior del Poder ejecutivo de 15 de Abril de 1873 y la declaración de compatibilidad de las dos asignaciones que disfrutaba el interesado:

Que declarada procedente la vía contenciosa, y habiendo dejado el Letrado de la parte demandante transcurrir con exceso el término que se le concedió para ampliar el recurso, se le declaró decaído de este derecho por providencia de la Sección de lo Contencioso:

Que emplazado mi Fiscal, contestó pidiendo que se consulte la absolución de la demanda y la confirmación en todas sus partes de la orden impugnada:

Vista la ley de 29 de Julio de 1837, que dispone, en su artículo 27, que «Los regulares exclaustrados y los secularizados en las épocas anteriores que no lo hubiesen sido á título de patrimonio ú otra congrua suficiente, ni hayan obtenido despues capellanía ú otra renta, ni tengan otros medios para ocurrir á su decente subsistencia, percibirán una pensión diaria que se determina en el art. 28»:

Visto el art. 1.º de la Ley de 9 de Julio de 1855, que dice: «Se prohíbe, tanto en la Península como en todos los dominios de Ultramar, la simultaneidad de dos ó mas destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos, sean cuales fueren, en todas las dependencias del Estado y que se paguen con fondos generales, provinciales ó municipales»:

Vista la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, en cuyo artículo 174 se declara que «El ejer-

cicio del Profesorado es compatible con el de cualquier profesión honrosa que no perjudique el cumplido desempeño de la enseñanza, é incompatible con todo otro empleo ó destino público»:

Considerando que la cuestión del presente litigio tiene por objeto determinar la compatibilidad que existe entre el percibo de la gratificación que en concepto de Profesor de Religión y Moral de la Escuela Normal de Orense estaba asignada á D. Fr. Manuel Cortés con la pensión que como exclaustrado disfrutaba dicho interesado:

Considerando que, si bien la Ley de 9 de Julio de 1855 prohíbe terminantemente el simultáneo percibo de dos ó mas sueldos, comisiones ó emolumentos pagados de fondos generales, provinciales ó municipales, esta prohibición no puede suponerse que alcance á las pensiones que la ley de 29 de Julio de 1837 reconoce á los exclaustrados, porque dichas pensiones, de carácter meramente alimenticio, fueron otorgadas en subrogación de las rentas ó emolumentos propios de los regulares dentro de sus respectivas comunidades al ser ocupados los bienes de éstas por el Estado, y no son, en su virtud, sueldo de funcionario público, ni retribución de servicios prestados á la Administración en cualquiera de sus dependencias, sino mera obligación del Tesoro con respecto á los que por la Ley tuvieron que abandonar sus claustros:

Considerando que esta doctrina ha sido reconocida además por Real decreto sentencia de 20 de Marzo de 1879, al consignar por idénticas razones que la prohibición sobre simultaneidad de dos ó mas destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos establecida por la Ley de 9 de Julio de 1855, no alcanza á los Catedráticos investidos de cargos eclesiásticos:

Considerando que, por tanto, la orden impugnada, al declarar dicha incompatibilidad, ha desconocido la índole y carácter de las asignaciones de los exclaustrados:

Conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron: D. Esteban Martinez, Presidente accidental; D. Feliciano Perez Zamora, D. Juan de Cárdenas, el Marqués de los Ulagares, D. Angel Maria Dacarrete, D. Dámaso de Acha, D. José Montero Rios, D. Enrique de Cisneros, don José Maria Valverde, D. Cándido Martinez y D. Juan Facundo Riaño;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en dejar sin efecto la Real orden del Poder Ejecutivo de 15 de Abril de 1873, y en declarar que el percibo de la pensión que como exclaustrado estaba reconocida á Don Fray Manuel Cortés es compatible con el percibo de la asignación de 375 pesetas con que se hallaba retribuido el cargo de Profesor de la Escuela Normal de Orense que desempeñaba el mismo exclaustrado.

Dado en San Sebastian á 24 de Agosto de 1888.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

Publicacion.—Leído y publicado fué el anterior Real decreto sentencia por el Excmo. Sr. D. Juan de Cárdenas, Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la audiencia pública celebrada por dicho Tribunal hoy 8 de Octubre de 1888.—Licenciado Julian Gonzalez Tamayo.

COMISION PROVINCIAL

DE ORENSE

En virtud de lo acordado hoy por esta Corporación se señala el día 30 del próximo mes de Octubre y hora de once de la mañana para la adjudicación en pública subasta de setecientos un metros cuadrados y setenta y cinco centímetros de fachada ó muro exterior del edificio destinado á Instituto de segunda enseñanza, bajo el tipo de treinta mil pesetas.

La subasta se verificará en el salón de sesiones de la Excmá. Diputación provincial, bajo la Presidencia del señor Gobernador civil ó Diputado en quien delegue y con asistencia del Diputado designado para tales actos y del Notario que se nombre, bajo el tipo anteriormente indicado, y con arreglo á las leyes y disposiciones vigentes hallándose de manifiesto para conocimiento del público el proyecto general de la obra, así como las condiciones especiales económicas que además de las facultativas han de regir en la ejecución de esta parte de la misma.

Abierta la licitación por espacio de media hora entregarán los licitadores en pliego cerrado sus proposiciones escritas en papel sellado de la clase 11.ª, arregladas al modelo que al final se inserta; y la cantidad que ha de consignarse previamente como garantía para tomar parte en la subasta será la de mil quinientas pesetas en metálico ó en efectos de la Deuda pública al tipo señalado por las disposiciones vigentes debiendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite haberse realizado el depósito, del modo que se previene en las indicadas disposiciones.

En el caso en que resulten dos ó mas proposiciones iguales se procederá en el acto y por espacio de media hora, á nueva licitación verbal entre sus autores, trascurrida la cual sin haberse mejorado ninguna de aquellas se adjudicará el remate procediéndose á un sorteo entre las proposiciones iguales.

Orense 29 de Septiembre de 1890.—E. V. P., Fidel Varela Millán.—El Secretario, Claudio Fernandez.

Modelo de proposicion

Don N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha... de... último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de setecientos un metros cuadrados y setenta y cinco centímetros de muros de fachada, correspondientes al nuevo edificio que la Excmá. Diputación provincial dedica á Instituto de segunda enseñanza, se compromete á tomar á su cargo la edificación de dicha superficie de muros, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad

de..... (aquí la proposición que se haga admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado de las 30.000 pesetas; pero advirtiéndose que será desechada toda propuesta en que no se exprese determinadamente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la cual se compromete el proponente á la construcción indicada.)

ANUNCIOS OFICIALES

AYUNTAMIENTOS

Beade.

Habiendo resultado por cumplimiento uno de los preceptos del reglamento de consumos, durante el período de publicación del repartimiento vecinal de dicho impuesto, correspondiente al actual año económico, la Junta municipal que presido, acordó se publique nuevamente como lo verifico por un nuevo plazo de ocho días hábiles, á contar desde la fecha de su inserción en el *Boletín oficial* de la provincia para los efectos que dicho reglamento determina.

[Por igual plazo y á los propios efectos queda asimismo expuesto al público la distribución de cuotas por el ramo de líquidos y alcoholes.

Beade Septiembre 27 de 1890.—El A. P., Nicanor Canal.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

Don Alfonso XIII, Rey constitucional de España y en su nombre la Reina Regente, del Reino Doña Maria Cristina (q. D. g.), y en el de esta D. Raimundo Naveira de Ibero, Juez de instrucción de Orense,

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á Ramon Salgado Conde (a) Pelon, vecino del pueblo de Riveirinho, parroquia de Santiago de las Caldas, Alcaldía de Canedo, cuyas señas personales y de vestir á continuación se expresan, á fin de que dentro de diez días á contar desde el siguiente al de la última publicación de la presente, comparezca ante este Juzgado, calle de Santo Domingo número 32 á rendir declaración indagatoria en sumario de causa criminal que se le sigue sobre lesiones á Manuel Iglesias Sieiro; apercibido que de no comparecer dentro de dicho termino será declarado rebelde con los demás que hubiere lugar.

Al mismo tiempo se ruega y encarga á toda clase de autoridades, la busca y captura del Ramon Salgado Conde, conduciéndolo caso de ser habido á disposición de este referido Juzgado con el objeto de que vá hecho merito.

Dado en Orense á veintitres de Septiembre de mil ochocientos noventa.—Raimundo Naveira de Ibero.—El Actuario, Pedro Cardero.

Señas personales y de vestir del Ramon Salgado.

Estatura regular, como 18 años de edad, pelo, cejas y ojos negros, nariz y boca regulares, cara redonda, color bueno, es tuerto ó ciago de un ojo, viste pantalón, chaleco y chaqueta de tela rayada color claro, usa á la cabeza boina azul y calza borceguies de becerro.

LOTERÍA NACIONAL

PROSPECTO DE PREMIOS

Para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 23 de Diciembre de 1890

Constará de 50.000 billetes, á 500 pesetas cada uno, divididos en DÉCIMOS á 50 pesetas; distribuyéndose 18.250.000 pesetas en 7.654 premios, de la manera siguiente:

PREMIOS	PESETAS
1 de	2.500.000
1 de	2.000.000
1 de	1.000.000
1 de	750.000
1 de	500.000
2 de 250.000	500.000
3 de 125.000	375.000
4 de 80.000	320.000
6 de 50.000	300.000
10 de 40.000	400.000
20 de 20.000	400.000
2.100 de 2.500	5.250.000
4.999 reintegros de 500 pesetas para los 4.999 números cuya terminación sea igual á la del que obtenga el premio mayor.	2.499.500
99 aproximaciones de 2.500 pesetas cada una, para los 99 números restantes de la centena del que obtenga el premio de 2.500.000 pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 99 números restantes de la centena del premiado con 2.000.000 de pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 99 números restantes de la centena del premiado con 1.000.000 de pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 94 números restantes de la centena del premiado con 750.000 pesetas.	247.500
99 idem de 2.500 id., para los 94 números restantes de la centena del premiado con 500.000 pesetas.	247.500
2 idem de 44.000 id., para los números anterior y posterior al del premio mayor.	88.000
2 idem de 28.000 id., para los números anterior y posterior al del premio segundo	56.000
2 idem de 18.000 id., para los números anterior y posterior al del premio tercero	36.000
2 idem de 12.000 id., para los números anterior y posterior al del premio cuarto	24.000
2 idem de 7.000 id., para los números anterior y posterior al del premio quinto	14.000
7.654	18.250.000

Las aproximaciones y los reintegros son compatibles con cualquier otro premio que pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las aproximaciones señaladas para los números anterior y posterior de los cinco premios mayores, que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 50.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.—Para la aplicación de las aproximaciones de 2.500 pesetas, se sobrentiende que si el premio mayor correspondiese por ejemplo al número 25, el segundo al 3.400, el tercero al 13.073, el cuarto al 20.199 y el quinto al 49.913, se considerarían agraciados respectivamente los 99 números restantes de las centenas del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto; es decir, desde el 1 al 100, del 3.301 al 3.399, del 13.001 al 13.100, del 20.101 al 20.200 y del 49.901 al 50.000.—Tendrán derecho al reintegro del precio del billete, según queda dicho, todos los números cuya terminación sea igual á la del que obtenga el premio de 2.500.000 pesetas; de manera que si este caso en suerte al número 803 ó al 804, etc., se entenderán reintegrados todos los que terminen en 3 ó en 4, ó sea una por cada decena.—Al día siguiente de celebrarse el Sorteo, se exhibirán al público listas de los números que obtengan premio, único documento por el que se efectuarán los pagos, según lo prevenido en el art. 12 de la Instrucción del ramo, debiendo recibirse con exhibición de los billetes, conforme á lo establecido en el 14.—Los premios se pagarán en las Administraciones en que se vendan los billetes.—Terminado el Sorteo se verificarán otros, en la forma prevenida por dicha Instrucción, para adjudicar los premios concedidos á las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia provincial de esta corte y á las huérfanas de militares y p. trios muertos en campaña, cuyo resultado se anunciará debidamente.

Madrid 3 de junio de 1890.—El Director general, OLEGARIO ANDRADE.

ANUNCIOS

El que hubiese hallado un perro de raza inglesa, pelo corto, color blanco, con toda la cola y orejas color canela; puede entregarlo en la Administración de Loterías de la calle del Progreso, que se le gratificará.

LA URBANA

COMPANIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS FUNDADA EN 1838

Fondos de garantía 224.000.000 de rs.

Tiene el honor de participar al público, que con fecha 16 de Julio último ha nombrado Director particular para esta provincia al Sr. D. M. Díez Villalobos, el cual tiene establecidas sus oficinas en esta ciudad, calle de Cisneros, núm. 5, 2º

PASAJES GRATIS A CUBA.—Se

contrata á los trabajadores de 16 á 40 años de edad que deseen emplearse en las canteras de hierro en Cuba, abonándoles buen jornal por el tiempo que les convenga, no bajando de seis meses, pasado cuyo plazo podrán rescindir ó renovar el contrato. Para mas informes, dirigirse á LA ACTIVIDAD, calle de Alba, núm. 19, Orense.

BONARES.—Se compran los de los ejércitos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así como los créditos de fallecidos en Ultramar. También se compran valores del empréstito de 175 millones.

Dirigirse á LA ACTIVIDAD, Alba, 19, Orense.

ESPEJOS.—Se venden dos magníficos ovalados de cuerpo entero, en precio sumamente ventajoso.

En esta imprenta darán razón.

Se vende la casa núm. 32 de la calle del Instituto.

En la calle del Progreso, número 53 principal, darán razón.—32

Colegio de Santo Tomás

Primera enseñanza.—Segunda enseñanza.—Carreras especiales.

En este acreditado Establecimiento que cuenta próximamente con 30 años de próspera existencia, y en el cual los alumnos de segunda enseñanza obtienen resultados brillantísimos, queda abierta la matrícula para el curso de 1890 á 91 desde el 15 de Septiembre.

Se admiten alumnos pensionistas y externos.

Los pensionistas son asistidos con un esmero que supera á toda ponderación y del cual solo pueden darse buena cuenta los niños que ya tuvieron la fortuna de estar á pupilos en este Colegio y á cuya imparcial opinión, lo mismo que á la de sus padres, se puede consultar.

Calle de Moratin, número 4, se dan reglamentos y facilitan detalles á quien los pida al Sr. Director.

VICICLETA

Se vende una en buen estado de uso, y por poco precio. Paz, 4, darán razón.

Imprenta LA POPULAR.